

El acceso público a la información en México

Janet Oropeza Eng

Maestra en Ciencia Política por la Universidad de Waterloo, Canadá y Licenciada en Política y Administración Pública por el COLMEX. Ha laborado en diversas organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ipsos-Bimsa, y Cívicus, Consultores en Gestión Pública y Social. Antes de incorporarse a Fundar, trabajó en la Iniciativa Think Tank del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo en su oficina de Ottawa y Nairobi.

Entrevista concedida a Revista Ágora por Maria Aparecida Moura

Janet Oropeza ès Investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación en Mexico.

Maria Aparecida Moura: ¿Cómo es el acceso público a la información en México?

Janete Oropeza: En 2002, México aprobó su primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, siendo una de las primeras en la región latinoamericana. Su aplicación, sin embargo, se circunscribía al ámbito federal, por lo que en las 32 provincias del país comenzaron a aprobarse leyes que garantizaban el derecho de acceso a la información de forma desigual. Algunas eran muy progresistas, mientras que en otras los y las ciudadanas enfrentaban muchos retos y negativas para acceder a información. Finalmente, en 2014 se aprobó una reforma constitucional y en 2015 una Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información que amplió el derecho de acceso a la información y sentó ciertas bases generales que debían implementarse en todo el país.

Revista Ágora: ¿Cuáles son las principales características de la ley de acceso a la información en México?

Janete Oropeza: El acceso a la información en México es confidencial -ya que puede ser ejercido por cualquier persona- y es gratuito si la información se provee de forma electrónica. La ley mexicana también establece un catálogo amplio de información que las agencias estatales deben hacer pública de forma obligatoria, sin que medie ninguna solicitud. La ley mexicana tiene un principio de subsidiariedad, lo que significa que las agencias públicas están obligadas a hacer un esfuerzo por subsanar las carencias que tuvieran las solicitudes de acceso a información que realizan las personas. Asimismo, la ley prohíbe la reserva de información en casos de violaciones graves a derechos humanos y en actos relacionados con hechos de corrupción. La reforma constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a Información aprobada en 2015 incluyeron las siguientes innovaciones en el acceso a la información: al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información se le dio autonomía constitucional y se estableció que sus decisiones serían finales, es decir, que no podrían ser apeladas por entes públicos; se amplió el universo de agencias sujetas a la ley para incluir a partidos políticos, sindicatos, etc. y a todos aquellos que manejen recursos públicos; se creó un Sistema Nacional de Transparencia y una Plataforma Digital única donde se puede pedir información pública a todos los entes federales y estatales; entre otros.

Aunque la ley es de avanzada en el papel, su implementación ha enfrentado desafíos, pues el órgano autónomo de acceso a información no siempre ha jugado un rol progresista. Por ejemplo, en casos de violaciones a derechos humanos o corrupción ha elegido no abrir la información. Asimismo, la Plataforma Digital falla constantemente, lo que afecta el acceso a la información por la ciudadanía.

Revista Ágora: ¿Cómo ocurre el control social a través de la ley de acceso a la información? Cite algunas experiencias exitosas.

Janete Oropeza: Desde la aprobación de la primera ley de Transparencia y Acceso a la Información en 2002, la sociedad civil, académicos y los periodistas han ejercido el derecho de acceso a la información para llevar a cabo control social o auditorías sociales. Una de las primeras experiencias de control social se dio en 2003 cuando un grupo de seis organizaciones, incluida Fundar, hizo una auditoría social del destino de los recursos destinados para VIH-SIDA. Se descubrió que una parte de los recursos habían sido asignados de forma discrecional a una organización conservadora que los había utilizado para comprar plumas Mont Blanc, trajes de lujo, y tangas. Este escándalo fue denunciado públicamente y se conoció como “Tanga Gate”.

Otro ejemplo exitoso de control social se relaciona con la política de subsidios al campo en México, que en el discurso decía beneficiar a pequeños productores agrícolas. En 2010, Fundar y otras organizaciones usaron el acceso a la información para pedir información sobre la política de apoyo a agricultores en México. Lo que se descubrió es que los subsidios al campo en México beneficiaban mayormente a grandes agricultores, por lo que la política de subsidios mexicana había aumentado la desigualdad y pobreza, en vez de disminuirla. Asimismo, se detectaron irregularidades como que narcotraficantes o funcionarios públicos de alto nivel recibían subsidios agrícolas. De igual forma, había terrenos urbanos donde no había cultivos que recibían apoyos. El tema se colocó en el espacio público y se lograron reformas a la política de subsidios al campo para que esta funcionará mejor.

Revista Ágora: ¿Qué es la FUNDAR? ¿En qué contexto surgió la organización?

Janete Oropeza: Fundar es una organización de la sociedad civil mexicana creada en 1999, cuando el país estaba a punto de transitar a una democracia electoral. Fundar nace con el objetivo de avanzar a una democracia sustantiva, donde los ciudadanos y ciudadanas pudieran no sólo votar libremente, sino gozar del goce y garantía de sus derechos económicos, políticos y sociales.

Revista Ágora: ¿Cuáles son los principales proyectos desarrollados por la organización?
¿Cuáles son las principales estrategias de trabajo de la Organización?

Janete Oropeza: La organización implementa proyectos en seis líneas temáticas: 1) tierra y territorio, 2) rendición de cuentas y combate a la corrupción; 3) participación ciudadana; 4)

mujeres, derechos y ciudadanía; 5) derechos humanos y lucha contra la impunidad; y 6) justicia fiscal e igualdad.

Revista Ágora: ¿Cómo es el trabajo de Fundar en relación al acceso a la información? ¿Cómo Fundar apoya las acciones relacionadas con el acceso a la información? ¿Cómo se articula el acceso público a la información, la rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en las acciones de Fundar?

Janete Oropeza: Desde su creación, Fundar ha usado e impulsado mejoras al derecho de acceso a la información. Para Fundar, el acceso a la información es un derecho en sí mismo, pero también un derecho llave, que permite a las personas poder acceder a otros derechos. Por esta razón, Fundar, junto con otras organizaciones, empujó durante más de una década porque se fortaleciera el marco constitucional y legal de la transparencia y acceso a la información. Para ello, Fundar fundó una red llamada Colectivo por la Transparencia que articuló a varias organizaciones interesadas en el tema. El Colectivo monitoreaba el estado del acceso a la información y participó en el proceso legislativo que reformó la Constitución y creó la Ley General. El Colectivo también apoyaba a organizaciones en los diferentes estados del país que estuvieran buscando fortalecer la transparencia.

Para la mayoría de sus proyectos, Fundar hace uso del acceso a la información para realizar auditorías sociales a políticas y acciones del gobierno. Cuando se descubren irregularidades o problemas de corrupción, por ejemplo, en el ejercicio del gasto, Fundar exige una rendición de cuentas y sanciones para las agencias y funcionarios responsables.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

ENG OROPEZA, Janet. El acceso público a la información en México. *Revista Ágora: Políticas públicas, comunicação e governança informacional*, Belo Horizonte, v. 1, Número Especial, p. 130-135, jan ./jun. 2017. Entrevista concedida a Maria Aparecida Moura.